

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL
MAGISTRADA PONENTE: MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA**

PROCESO	ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTES	PAULA ANDREA MORALES OROZCO y LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO
DEMANDADOS	CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO
PROCEDENCIA	JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CTO DE MEDELLÍN
RADICADO	05001 31 05 003 2019 00433 01
SEGUNDA INSTANCIA	APELACIÓN
TEMAS Y SUBTEMAS	- Contrato de Trabajo - Responsabilidad del Gerente o Administrador
DECISIÓN	ACLARA, REVOCA PARCIALMENTE y MODIFICA

SENTENCIA No. 072

Medellín, veintiocho (28) de abril de dos mil veintitrés (2023)

En atención a lo previsto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020 convertido en legislación permanente a través Ley 2213 de 2022, una vez discutido y aprobado en la SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL el presente asunto, según consta en Acta N°011 de 2023, se procede a dictar **SENTENCIA** en orden a resolver el RECURSO DE APELACIÓN formulado por la apoderada judicial de la **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, contra la Sentencia del 15 de diciembre de 2021, proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

Las señoras **PAULA ANDREA MORALES OROZCO y LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO** presentaron demanda ordinaria laboral en contra de las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.** y el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, con el fin de que: **1) Se declare que ambas laboraron al servicio de las sociedades CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S., vínculo que culminó por decisión unilateral e injusta de las accionadas. 2) En armonía con lo anterior solicitaron que, se declare**

que las citadas sociedades, al igual que el representante legal de ambas, señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, son solidariamente responsables de las obligaciones patronales causadas en su favor. 3) Consecuencialmente peticionaron condenar a los demandados al reconocimiento de las siguientes acreencias:

- Para la señora **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO** las prestaciones sociales correspondientes al año 2019.
- Para ambas demandantes las vacaciones correspondientes a los años 2017 a 2019 y los intereses a las cesantías de 2017, la dotación (especie o dinero) no entregada entre 2017 y 2019, la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria reglada en el artículo 65 CST y la sanción por la no consignación de las cesantías.

Como sustento de sus pretensiones argumentaron las accionantes haber laborado en las instalaciones de la empresa **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S.**, vinculadas a través de contrato de trabajo a término indefinido, para desempeñarse como mercaderistas y operarias de producción; la señora **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** desde el 23 de enero de 2012, con una jornada comprendida de lunes a sábado, en horario de 7:00 am a 3:00 pm; mientras que **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO**, a partir del 1 de abril de 2007, con un itinerario de lunes a sábado de 6:00 pm a 6:00 am.

Que si bien fueron contratadas por la empresa en comento, en el mismo sitio funcionaba otra empresa de nombre **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, la cual, además de compartir establecimiento de comercio con la primera, tenían el mismo objeto social, estaban representadas legalmente por la misma persona - **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** -, aparte de ocupar a los mismos trabajadores.

No obstante, se indicó en la demanda que, desde el mes de febrero de 2019 el personal comenzó a advertir menos carga laboral en sus respectivos puestos, y más adelante, el 10 de abril de 2019, recibieron comunicación de **CEPRONAL S.A.S.** informando que hasta ese día laborarían, toda vez que la empresa dejaría de funcionar, decisión que se entendió como un despido sin justa causa.

Que se percataron de que la empresa estaba en proceso de liquidación, aunado a que puso en venta la maquinaria que se encontraba al interior de esta. Del mismo modo, señalaron que, en materia de obligaciones económicas, la empresa no era del todo cumplida, ya que para ese momento les adeudaban varios conceptos, como las vacaciones de 2017 y 2018, intereses a las cesantías de 2017, además de haber consignado tardíamente las cesantías de 2018, y tampoco les proporcionó la dotación correspondiente a 2018 y 2019.

Que si bien la demandante **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** convocó a la citada empresa a la Oficina del Trabajo el 4 de junio de 2019 con el objetivo de reclamar el pago de tales acreencias, en aquella oportunidad la empleadora manifestó que no tenía recursos para cubrir estas obligaciones,

En concordancia con ello, adujeron que la sociedad **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.** tiene la misma dirección de notificaciones de **CEPRONAL S.A.S.**, y fue creada por el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** para continuar con las actividades comerciales, sin tener que responder por las obligaciones laborales adeudadas, agregando que, pese a estar vinculadas a **CEPRONAL S.A.S.**, desplegaron tareas al servicio de ambas, ya que trabajaron con productos de la marca **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, distribuidos por su contratante (f. 1 a 11 Archivo 01 ED).

POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS

En el momento procesal oportuno, las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.** y el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** contestaron la demanda, aceptando el vínculo de las demandantes con la primera sociedad en comentario, al paso que niegan los servicios en favor de la segunda, argumentando en su defensa que tales personas jurídicas no tenían las mismas actividades, pues una sacaba la producción y la otra representaba la marca.

Seguidamente expusieron que, los conceptos cobrados por prestaciones y vacaciones ya habían sido cancelados; formulando en consecuencia como exceptivos los de: “(...) **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN; ILEGITIMIDAD EN LA CAUSA POR PASIVA; BUENA FE; COBRO DE LO NO DEBIDO** (...)” (f. 25 a 30 Archivo 07 ED).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Surtido el trámite de primera instancia, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, mediante Sentencia del 15 de diciembre de 2021 decidió:

“(...) PRIMERO: DECLARAR que entre la señora PAULA ANDREA MORALES OROZCO, quien se identifica con la cédula 1.040.733.327, y CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO, existió relación laboral entre el 23 de enero de 2012 y el 10 de abril de 2019, contrato de trabajo a término indefinido que terminó sin justa causa por parte del empleador.

SEGUNDO: DECLARAR que entre la señora LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO, quien se identifica con la cédula 43.096.929, y CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO, existió relación laboral entre el 1 de abril de 2007 y el 10 de abril de 2019, relación laboral que terminó sin justa causa por parte del empleador.

TERCERO: CONDENAR a CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO solidariamente a pagar a PAULA ANDREA MORALES OROZCO la indemnización por despido sin justa causa en la suma de \$3.708.118, suma de dinero que será indexada desde el 10 de abril de 2019 y hasta real y efectivamente se pague a la señora MORALES OROZCO.

CUARTO: CONDENAR a CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO solidariamente a pagar a LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO a título de indemnización por despido sin justa causa la suma de \$6.916.298, suma de dinero que será indexada desde el 10 de abril de 2019 hasta cuando real y efectivamente se pague a la demandante.

QUINTO: ABSOLVER a las entidades demandadas CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO de las pretensiones incoadas por las demandantes del pago de prestaciones sociales, indemnizaciones moratorias, y dotación de calzado y vestido de labor, de acuerdo con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: COSTAS procesales a cargo de las demandadas CEPRONAL S.A.S., COMESTIBLES GALEÓN S.A.S. y GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO solidariamente. Agencias en derecho en favor de PAULA ANDREA MORALES OROZCO en la suma de \$908.524, y agencias en derecho en favor de LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO en la suma de \$908.524 (...)”

Para arribar a esta decisión, el Juez de primer grado consideró, en primer lugar, que en el caso bajo estudio estaba por fuera de discusión la existencia de contrato de trabajo. Acto seguido, recordó las obligaciones patronales principales, entre las que se cuentan el pago de salarios y prestaciones en tiempo oportuno en favor de sus trabajadores, compromisos protegidos por el artículo 53 CN, frente a los cuales, de no cancelarse oportunamente podría causarse en favor de las trabajadoras la indemnización contemplada en el artículo 65 CST.

En relación con esta indemnización, recordó lo considerado por la Sala de Casación Laboral en el sentido de precisar que la procedencia de aquella no es automática, en tanto se requiere la configuración de la mala fe de parte del patrono, cuestión que también es requerida para la sanción contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. De otro lado, relató las causas que dan paso a que el empleador termine el contrato de trabajo, contempladas en el artículo 62 CST, entre las cuales, resaltó, no se estipula como justa causa para finalizar el vínculo, las dificultades económicas de la empresa.

Luego, frente a la identidad patronal o sustitución (Art. 67 CST), señaló que, si en el mismo lugar operan varias empresas con los mismos instrumentos y el mismo personal, en virtud el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, estas son las empleadoras del trabajador, pues los formalismos jurídicos no pueden desvirtuar lo que se verifique por los sentidos.

Así mismo precisó que, en este ámbito, conforme lo reseñado en la Ley 222 de 1995, los representantes legales son solidariamente responsables de responder por las obligaciones laborales de los trabajadores, considerados como sujetos de especial protección por la Jurisprudencia Constitucional, lo anterior en concordancia con la Ley 1258 de 2008 que prohíbe la creación de sociedades anónimas simplificadas para defraudar a terceros, pues dada la facilidad para su creación y liquidación, muchas veces queda el trabajador desprovisto de tener a quien reclamar las prestaciones, circunstancia que no puede permitirse en un Estado Social de Derecho.

A partir de todo lo expuesto, precisó que, conforme lo consignado en la demanda y las pruebas documentales aportadas, quedó plenamente acreditado que a la demandante **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** le fueron pagadas las prestaciones sociales del año 2019, conforme lo confesó desde el mismo escrito demanda.

En cuanto a las vacaciones de 2017 y 2018 tampoco debía prosperar, dado que está acreditado su pago, circunstancia que se reitera respecto de los intereses a las cesantías

deprecados. En lo atinente a la dotación, coligió el Juzgador que no quedó demostrado el perjuicio causado por la falta de entrega de esta, debiendo absolver a las accionadas de aquella pretensión.

En cuando a la indemnización moratoria y la sanción por la omisión en la consignación de las cesantías solicitadas, anotó que no se probó la mala fe de la empleadora; no obstante, refirió que, sí procedía imponer a las sociedades y a la persona natural que integran la parte demandada, el pago de la indemnización por despido injusto en favor de la señora **MORALES OROZCO**, en cuantía de \$3.708.118, misma que dijo, deberá pagarse indexada.

Respecto a la señora **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO**, expresó que, al igual que para la anterior accionante, la accionada probó el pago de la liquidación respectiva, así como lo correspondiente a las vacaciones de 2017 y 2018, y los intereses a las cesantías de 2017, reiterando lo argüido en precedencia para negar la indemnización moratoria, la sanción por la no consignación de cesantías, y el pago de la dotación reclamada. Accedió a la indemnización por despido sin justa en la suma de \$6.916.298, la cual deberá ser indexada.

RECURSOS DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la parte **DEMANDADA** mostró inconformidad con el fallo, sustentada en la vinculación del señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** como persona natural, pues pese a que se habló de la configuración de una sociedad nueva, en esta su representado no figura como socio, de donde pueda derivarse la mala fe tendiente a evadir las obligaciones de dicho contrato, máxime que, como quedó demostrado y no es un punto recurrido, el despido fue sin justa causa por una situación económica demasiado precaria, que en cierto modo impedía sostener los pagos y llevó a manifestarles que no podían seguir trabajando, ciñendo su disenso con la decisión únicamente en lo correspondiente a la responsabilidad solidaria impuesta en la sentencia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término otorgado, el mandatario de las **DEMANDANTES** presentó alegaciones insistiendo en que sus representadas fueron despedidas de manera injusta de cada una de sus vínculos, así como el hecho de que el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** fungió como representante legal de las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, de las cuales en la actualidad ejerce como liquidador. Luego, hizo énfasis en la demora en la que incurrieron las accionadas para el pago de la liquidación definitiva en favor de las demandantes.

De otro lado expuso que, a la fecha la marca arepas “Galeón” sigue en circulación, pero bajo la promoción de la empresa **M&V GRUPO CONSULTOR S.A.S.**, representada precisamente por la hija del citado, compartiendo dirección de notificaciones, a efectos de que se fijara caución sobre el 50% de las pretensiones de la demanda, dada la negativa de los derechos laborales que las accionantes han recibido de aquellas (Archivo 04 ED Tribunal).

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que ocupa la atención de la Sala gravita en verificar la responsabilidad solidaria del señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** respecto de los rubros por los que resultaron condenadas las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN, COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**

CONSIDERACIONES

Sea lo primero reseñar que en atención a lo normado en el artículo 66A CPT y SS, la decisión de esta instancia se circunscribe a los asuntos materia del recurso de apelación, restricción a la competencia funcional del fallador de segundo grado, que impone el deber de decidir estrictamente dentro del marco fijado en la alzada (SL 2808-2018), con la salvedad hecha para los derechos laborales mínimos e irrenunciables del trabajador (SL8613-2017 y SL12869-2017), según lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003.

DE LA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Juez de primer grado concluyó en su decisión que, las señoras **PAULA ANDREA MORALES OROZCO y LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO** estuvieron vinculadas mediante contrato de trabajo a las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, ello entre el 23 de enero de 2012 y el 10 de abril de 2019 para la primera, y del 1 de abril de 2007 y el 10 de abril de 2019 respecto de la segunda.

A partir de allí, consideró el *A quo* que las demandantes fueron desvinculadas de manera injusta, y, en consecuencia, condenó a las citadas sociedades como empleadoras al reconocer y pagar debidamente indexada la indemnización por despido injusto. Dentro de dicha orden, el Juzgador también coligió que el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, en su condición de representante legal de ambos entes morales, era solidariamente responsable de las condenas fulminadas en contra de las primeras.

Justo de esta última circunstancia se duele la parte demandada, esbozando en su alzada que la persona natural no es responsable solidario en los términos indicados en la sentencia, como quiera que de su parte no se advierte mala fe direccionada a evadir las obligaciones patronales para con las accionantes.

En ese sentido, a efectos de analizar el conflicto traído a esta sede, lo primero a resaltar es que, precisamente, de los certificados de existencia y representación legal de las sociedades descritas (f. 3 a 15 Archivo 07 ED), se colige sin mayor dificultad que el señor **OCHOA ARANGO**, en efecto, aparece registrado como “*representante legal y gerente*” de tales empresas.

Puestas de ese modo las cosas ha de reseñarse que, dentro de la estructura orgánica de las sociedades comerciales, las cuales, resáltese, están constituidas como personas jurídicas distintas a sus socios (Art. 98 C. Co.), aquellas tienen una ramificación jerárquica con órganos de administración y encargados de gerenciar o administrar sus intereses

económicos, que, si bien con sus actos obligan a la persona jurídica como tal, no tienen la entidad para subrogarla en su posición de garante dentro de las relaciones jurídicas de las que haga parte (Art. 196 C. Co.).

Dicha circunstancia no es ajena, incluso, a los vínculos de índole laboral consolidados con la sociedad comercial, en el entendido que, al tenor del artículo 22 CST, es a quien se reputa como empleador el llamado a la responder por las obligaciones frente a los trabajadores, sin que pueda decirse que el representante o mandatario de aquel es responsable de los compromisos del primero, tal como lo dispone el artículo 32 ibídem.

En esos términos lo ha precisado la Sala de Casación Laboral, citándose como ejemplo de ello, lo señalado en la Sentencia SL3901-2018, en la cual rememoró lo señalado en decisión del 25 de mayo de 2007 dentro del Radicado No. 28779 en la que dijo:

“(…) La referida representación consiste en la delegación de funciones, de atribuciones que normalmente corresponden directamente al empleador, pero que dadas las especiales circunstancias, como la de no poder hacer presencia en todos los sitios, en todas las sucursales, o dependencias correspondientes a un mismo empleador, debe éste encomendar, encargar, expresa o tácitamente, su representación, su reemplazo, para lograr así la debida organización y funcionamiento; generalmente tal representación la ejerce un empleado suyo, de condiciones especiales, directivos, con don de mando, que sustituyen al representado, en distintos actos, los cuales se entenderán ejecutados por aquel, con todos los efectos y consecuencias.

Dicha figura jurídica se da por virtud de la ley laboral (artículo 32 del CST), del convenio o del reglamento interno de trabajo y tiene por finalidad, la de ejercer el poder subordinante durante la relación laboral, con todos los matices de ese elemento, característico de la relación laboral, toda vez que, como se indicó, el empleador no está en posibilidad de ejercerlo en todos los frentes de trabajo, en las distintas factorías, oficinas o dependencias pertenecientes a una misma persona natural o jurídica.

Esa figura, de la representación, implica que el delegado o encargado, obliga, con sus actos u omisiones, al representado o delegatario -empleador-, quien deberá asumir las consecuencias de las conductas de aquel, por entenderse que de él provienen las gestiones, comportamientos, decisiones o directrices que ejerce e imparte el representante al grupo de trabajadores a su cargo, es decir que los pagos salariales, prestaciones, indemnizatorios de los empleados corren a cargo exclusivo del empleador, sujeto del contrato de trabajo, quien se beneficia de los servicios prestados por los trabajadores, sin que transmita sus obligaciones a quien lo representa, sino que delega expresa o tácitamente sus derechos, con respecto a un grupo determinado de trabajadores que laboran para él.

Así, por el hecho de hacerse representar por una persona, delegado suyo, el empleador no transfiere, ni puede exigir, el compromiso de cubrir las acreencias laborales de los trabajadores, ni estos pueden demandar su cumplimiento de los representantes del empleador, ya que ellos no tienen responsabilidad personal, dada su calidad de simples gestores o administradores.

Un gerente, un administrador, un director o un liquidador, como son algunos de los ejemplos que prevé el artículo 32 citado, no se convierte en empleador de los trabajadores, pues continúa tal carácter en el dador del empleo, aún cuando delegue determinadas funciones, como las de contratar personal, dirigirlo, darle órdenes e instrucciones específicas respecto a la forma de la prestación del servicio o de la disciplina interna del establecimiento o entidad. Tampoco, aquella norma desplaza o asigna algún tipo de

responsabilidad en materia de las obligaciones laborales, y por ello, mal podría predicarse una solidaridad, a la que aspira el recurrente. (CSJ SL, 25 may. 2007, rad. 28779). (...)

Nótese entonces que, desde la regulación sustantiva laboral y el desarrollo jurisprudencial, ha quedado decantado que los representantes del empleador, entre los que se cuentan los gerentes o administradores, condición que le valió al señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** para ser condenado en primera instancia, no son los llamados a responder por las obligaciones que recaen directamente sobre la empresa, en su posición de empleadora, lo que de entrada, hace decaer cualquier atisbo de responsabilidad directa respecto de las indemnizaciones reconocidas en favor de las señoras **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** y **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO**, al paso que tampoco son predicables las circunstancias fácticas que configuran la responsabilidad solidaria de los artículos 34 y 35 CST.

Ahora, desde el punto de vista societario, como bien lo anotó el Juez de primer grado, hay que decir que el régimen de las sociedades por acciones simplificadas - SAS-, naturaleza jurídica de las accionadas, establecido por la Ley 1258 de 2008, presupone en sus artículos 1° y 42° lo siguiente:

“ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIÓN. *La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes.*

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.

(...)

ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. *Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.*

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario.

La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario.

(...)”.

En armonía con lo anterior, al tenor del Artículo 24, numeral 5°, del Código General del Proceso, se definen las competencias jurisdiccionales de la Supersociedades con el siguiente contenido:

“5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:

(...)

“d) La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores

que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Así mismo, conocerá de la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios. (...)”.

Emerge así de lo antelado que, la responsabilidad solidaria en este caso, a cargo del **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** podría llegar a operar, cuando la compañía fuese utilizada para defraudar la Ley o actuar en perjuicio de terceros, situación que una vez declarada por la autoridad competente, habilita el ejercicio de la acción indemnizatoria ante la respectiva autoridad judicial, situación que no quedó evidenciada en el presente asunto.

No obstante que, como se dejó explicitado, la declaración de nulidad de los actos defraudatorios en perjuicio de terceros, para descorrer el velo societario, corresponde efectuarla a la autoridad encargada de su vigilancia, a saber, la *Superintendencia de Sociedades*, aun en gracia de discusión, y en consideración a la responsabilidad de los representantes legales que consagra el artículo 200 C.Co.¹, analizadas las probanzas allegadas al plenario, se llega la misma conclusión, toda vez que, de la prueba documental, más allá de evidenciarse la participación del señor OCHOA ARANGO en las empresas como representante legal, no logra extractarse actuación indebida del citado, o contraria a los intereses de las demandantes.

En ese sentido se advierte que, el cúmulo probatorio adjunto a la demanda 7 a 31 Archivo 03 ED, así como el allegado con la réplica al gestor de folios 7 a 44 Archivo 06 ED, se compone principalmente de comprobantes de nómina, ejemplares de los contratos de las demandantes, reporte de cotizaciones a pensión, entre otros, documental que poco o nada aporta en pro de escudriñar en la responsabilidad endilgada a la persona en mención.

Igual resultado se obtiene de reexaminar la testimonial escuchada en primera instancia de las señoras BEATRIZ ELENA JIMÉNEZ CASTAÑO: (Min. 3:30 a 11:30 Archivo 05 ED), ANA CECILIA MARTÍNEZ (Min. 20:35 a 25:10 Archivo 05 ED) y PAULA CATALINA OCHOA ZULUAGA (Min. 12:00 a 17:53 Archivo 05 ED). Las dos (2) primeras declarantes, quienes en su momento laboraron al servicio de **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** como auxiliar contable y mercadería, respectivamente, encaminaron su relato a precisar que la citada sociedad funcionaba en el mismo contexto locativo de la demandada **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, siendo gestionadas ambas por el señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, detallando también la forma cómo se

¹ CÓDIGO DE COMERCIO. ARTÍCULO 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.

“No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.

“En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.

“De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar

“Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su representante legal.

“Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos.”

enteraron de la liquidación de la empresa y las circunstancias que rodearon la desvinculación del personal.

A su turno, la testigo OCHOA ZULUAGA, hija de la persona natural demandada, expuso que fue Jefe de Gestión Humana de **CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN**, sociedad de la que dijo, se vio en la obligación de prescindir de sus trabajadores, toda vez que tenía pasivos que le impedían continuar con la explotación del objeto social, aunque, aclaró, que en la actualidad otra empresa de nombre “*Normandy*” está promocionando las arepas, negocio que era el ejecutado por la sociedad en comento.

Nótese entonces que, el ejercicio demostrativo realmente no muestra los actos defraudatorios para llevar a la conclusión en punto a la responsabilidad en cabeza del señor **OCHOA ARANGO**, más aún si se tiene en cuenta que, basados en todas las circunstancias fácticas que rodean la cuestión estudiada, tampoco emerge la utilización de la sociedad con ese fin, pues solo basta con echar un vistazo al trasegar de las demandantes dentro de **CEPRONAL S.A.S. - EN LIQUIDACIÓN**, empresa en la cual permanecieron durante más de seis (6) años, sin reparo en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, de los que pueda deducirse ese interés subrepticio con miras a desconocer las garantías laborales de aquellas, pues de hecho, a la par de lo dicho, resulta paradójico que aun, cuando el Juzgador concluyó que no había mala fe de parte de los demandados, y que los derechos prestacionales y salariales de las actoras fueron cabalmente cubiertos, le endilgó responsabilidad solidaria al gerente de las demandadas, sin adentrarse a verificar si los medios suasorios acopiados daban cuenta de actuaciones reprochables de su parte.

De ahí que, el razonamiento del Juez de instancia plantea una especie de responsabilidad objetiva que la regulación societaria no apareja, pues partió simplemente de que, al encontrar probados los presupuestos para declarar la terminación injusta del contrato, lo cual comportaba el pago de la indemnización respectiva, el representante de las empresas era solidariamente responsable, pero pasó por alto que, el desenlace contractual, conforme lo discurrido hasta aquí, es atribuible a la empleador, es decir, a las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**

Todo lo anterior lleva a absolver a la persona natural representante legal de aquellas, de la responsabilidad impuesta en la sentencia apelada, al igual que de la condena en costas fulminada en su contra.

Luego, también considera la Sala procedente aclarar los numerales primero y segundo de la parte resolutive de la decisión apelada, pues tal como aparecen redactados, pareciera que la declaratoria del contrato de trabajo incluyere al señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO** como patrono, debiendo clarificarse que la relación laboral allí declarada se dio entre las demandantes como trabajadoras y **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN y COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, en condición de empleadoras.

En consecuencia, se aclarará la sentencia en el aspecto descrito, y se revocarán las condenas impuestas al señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, confirmándose en lo demás la Sentencia recurrida. Sin costas en esta instancia ante la prosperidad del recurso.

Sin que sean necesarias más consideraciones, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: ACLARAR los numerales **PRIMERO** y **SEGUNDO** de la Sentencia del 15 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en el sentido de precisar que las relaciones laborales allí declaradas se dieron entre las señoras **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** y **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO**, como trabajadoras, y las sociedades **CENTRAL PROCESADORA NACIONAL – CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** y **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.**, en condición de empleadoras.

SEGUNDO: MODIFICAR y **REVOCAR PARCIALMENTE** los numerales **TERCERO** y **CUARTO** de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

*“(…) **TERCERO: CONDENAR** a **CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** y **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.** a pagar a **PAULA ANDREA MORALES OROZCO** la indemnización por despido sin justa causa en la suma de **\$3.708.118**, suma de dinero que será indexada desde el 10 de abril de 2019 y hasta real y efectivamente se pague a la señora **MORALES OROZCO**.*

***CUARTO: CONDENAR** a **CEPRONAL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN** y **COMESTIBLES GALEÓN S.A.S.** a pagar a **LUZ ELENA GÓMEZ AGUDELO** a título de indemnización por despido sin justa causa la suma de **\$6.916.298**, suma de dinero que será indexada desde el 10 de abril de 2019 hasta cuando real y efectivamente se pague a la demandante. (...)”*

TERCERO: REVOCAR parcialmente el numeral **SEXTO** de la sentencia apelada en lo referente a la condena en costas y agencias en derecho impuestas en contra del señor **GUILLERMO LEÓN OCHOA ARANGO**, confirmándose en lo demás este numeral.

CUARTO: Sin COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Los Magistrados,

MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA

MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA